

VERSIÓN PÚBLICA DE RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

De conformidad con los artículos 3, fracción XXI, 111 y 116, de la Ley General de Transparencia; 113, fracción I, de la Ley Federal de la materia; 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, en esta versión pública que corresponde a la de la resolución emitida en el procedimiento de responsabilidad administrativa CSCJN-DGRARP-P.R.A. 40/2017, se testa la información considerada confidencial, por encuadrar en los supuestos normativos citados, particularmente por tratarse de datos personales concernientes a las personas físicas que intervinieron en el procedimiento como pueden ser, domicilio, edad, estado civil, fotografía o RFC, de la persona a quien se atribuye la falta, denunciante o de testigos, en su caso, el puesto o área de adscripción, o bien, la cita de documentos u otros datos que permitirían identificar o hacer identificable a alguna de las personas involucradas y, en su caso, datos sensibles sobre la salud física, emocional o mental de alguna de las personas involucradas en el asunto, cuya restricción ha sido conocida y validada por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la resolución en diversos expedientes, entre ellos los identificados como CT-CUM/A-9-2017, emitida el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, CT-Cl/A-10-2018 emitida el veintisiete de junio de dos mil dieciocho, CT-Cl/A-24-2018 de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, CT-CI/A-11-2019 dictada el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, CT-CI/A-15-2019 de once de septiembre de dos mil diecinueve, CT-CI/J-36-2019 emitida el diez de diciembre de dos mil diecinueve, CT-CUM/J-13-2019 de doce de noviembre de dos mil diecinueve, CT-CI/J-9-2020 de seis de mayo de dos mil veinte y CT-VT/J-10-2020 de siete de octubre de dos mil veinte.

Ciudad de México, a once de julio de dos mil veintidós.

Abogada Paula del Sagrario Núñez Villalobos Directora General

Elaboró pública:	versión	Licenciada Sandra Merino Herrera, Profesional Operativa.	
Validó pública:	Versión	Maestra Olga Suárez Arteaga, Subdirectora General de Responsabilidades Administrativas	

¹ La resolución de los asuntos mencionados se pueden consultar en los siguientes hipervínculos: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2017-03/CT-CUM-A-9-2017.pdf https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2018-08/CT-CI-A-10-2018.pdf https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2018-12/CT-CI-A-24-2018 0.pdf https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2019-08/CT-CI-A-11-2019.pdf https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2019-09/CT-CI-A-15-2019.pdf https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2019-11/CT-CUM-J-13-2019.pdf https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2020-06/CT-CI-J-9-2020.pdf https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2021-01/CT-VT-J-10-2020.pdf

.d630fcb9f52bca0abd957b75d5ae486f0cdfe00939af5f990cad93142e645d



PROCEDIMIENTO
RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA: 40/2017

DE

SERVIDOR INVOLUCRADO:

PÚBLICO

Ciudad de México. Acuerdo del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al siete de julio de dos mil veintiuno.

VISTOS para emitir resolución en el procedimiento de responsabilidad administrativa número 40/2017, y

RESULTANDO:

PRIMERO. Denuncia. Por auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete, el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibido el oficio DGPC-10-2017-3223 del diecisiete de ese mismo mes con sus anexos, signado por el Director General de Presupuesto y Contabilidad, mediante el cual informó la existencia de hechos que pudieran constituir alguna infracción administrativa derivado de la omisión de devolver el importe del remanente de los viáticos que le fueron otorgados con motivo de 3 comisiones:

, llevadas a cabo por

(fojas 1 a 143).

SEGUNDO. Inicio de procedimiento. En ese mismo auto se ordenó el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa al citado servidor público, al considerar que existían elementos suficientes para tener por probablemente



PODE

,8

acreditada la causa de responsabilidad prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 8, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en relación con los artículos 130, 132 y Cuarto transitorio del Acuerdo General de Administración I/2012, así como con el Décimo Sexto del diverso Acuerdo General de Administración XII/2003 (fojas 144 a 158).

Además, en el citado proveído, se requirió al servidor público involucrado para que en un término de 5 días hábiles formulara su informe por escrito, sobre todos y cada uno de los hechos que se le imputaban. Dicho acuerdo fue notificado personalmente a el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete (foja 161).

TERCERO. Informe de defensa del presunto responsable.

Por acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, se hizo efectivo el apercibimiento decretado el treinta de octubre de dos mil diecisiete y con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se tuvo por precluido el derecho de

para rendir el informe de defensas y ofrecer pruebas, ya que el plazo de 5 días hábiles con que contaba feneció el doce de diciembre de dos mil diecisiete, sin que hubiera sido presentado (foja 167 en relación con las fojas 157, 158 y 162).

Asimismo, con fundamento en los artículos 305, 306 y 316 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria y 19 del Acuerdo General Plenario 9/2005, se hizo



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

efectivo el apercibimiento formulado en auto de cinco de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN marzo de dos mil dieciocho, en atención a que no señaló domicilio en la Ciudad de México para recibir notificaciones, por lo que éstas, aun las de carácter personal, se realizaron por medio de rotulón fijado en los estrados de la autoridad substanciadora y se hizo constar que no designó personas autorizadas (fojas 167 y 168 en relación con las fojas 157, 158 y 162).

> CUARTO. Cierre de instrucción. Concluida la tramitación del procedimiento administrativo de responsabilidades y tomando en consideración que no se encontraba diligencia alguna pendiente de practicar, el catorce de febrero de dos mil veinte, el Contralor de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró cerrada la instrucción, en términos del artículo 39 del Acuerdo General Plenario 9/2005, por lo que ordenó la emisión del dictamen respectivo (foja 195).

> QUINTO. Dictamen de la Contraloría. El diecinueve de febrero de dos mil veinte, el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió dictamen con los puntos resolutivos siguientes:



"PRIMERO. Se estima que responsable de la falta administrativa por la que se inició este procedimiento, de acuerdo con lo señalado los considerandos cuarto y quinto del presente dictamen.

SEGUNDO. Se propone sancionar a con acorde con lo expuesto en el último considerando de este dictamen." (foja 208).

El dictamen de la	Contraloría se suste	nta en que
		adscrito al

, por lo que

.d630fcb9f52bca0abd957b75d5ae486f0cdfe00939af5f990cad93142e645d1

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incumplió con las normas relacionadas con el manejo de recursos económicos públicos, al no reembolsar el remanente de los viáticos ministrados dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha en que fueron realizadas las comisiones

se tuvo que recuperar dichos recursos a través del descuento vía nómina.

SEXTO. Trámite del dictamen. El dictamen se remitió el veinticuatro de febrero de dos mil veinte, mediante oficio CSCJN/DGRARP/SGRA/265/2020, dirigido al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que conociera y resolviera el asunto en forma definitiva, en términos de los artículos 133, fracción II,¹ de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 23, 26, segundo párrafo, y 39, último párrafo, del Acuerdo General Plenario 9/2005.

SÉPTIMO. Suspensión de plazos y términos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 94, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 11, fracción XXI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación ante la situación de emergencia mundial y nacional derivada de la pandemia originada por la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) que pone en grave riesgo la salud y, por tanto, la integridad personal, determinó mediante los Acuerdos Generales Plenarios 3/2020, 6/2020, 7/2020, 10/2020, 12/2020 y



¹ Conforme al texto de la LOPJF anterior, previo a su última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2018.

.d630fcb9f52bca0abd957b75d5ae486f0cdfe00939af5f990cad93142e645d1

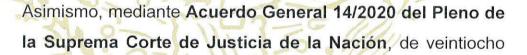


PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

13/2020, declarar inhábiles los días comprendidos dentro del SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN periodo del dieciocho de marzo al dos de agosto de dos mil veinte² y, en consecuencia, la suspensión de los plazos, por lo que no corrieron términos, al tratarse de asuntos materialmente jurisdiccionales que son competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo anterior, en consistencia con el acuerdo primero, incisos m) y n) del diverso Acuerdo General Plenario 18/2013, por el que se determinan los días hábiles e inhábiles y que entre otros supuestos incluye aquellos días que: (i) se suspendan labores en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (ii) cuando ésta no pueda funcionar por causa de fuerza mayor, y (iii) los demás que el Tribunal Pleno determine como inhábiles.



DERACIO HIRIDICAS



² Acuerdo General número 3/2020, de 17 de marzo de 2020, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se suspenden actividades jurisdiccionales y, por ende, se declaran inhábiles los días que comprenden del 18 de marzo al 19 de abril de 2020, y se habilitan los días que resulten necesarios para proveer sobre la admisión y suspensión de controversias constitucionales urgentes. D.O.F. 18 de mayo de 2020.

Acuerdo General número 6/2020, de 13 de abril de 2020, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se prorroga la suspensión de actividades jurisdiccionales y, por ende, se declaran inhábiles los días del periodo comprendido del 20 de abril al 5 de mayo de 2020, y se habilitan los días que resulten necesarios para proveer sobre la admisión y suspensión de controversias constitucionales urgentes, así como para la celebración a distancia de las sesiones del pleno y de las salas de este alto tribunal. D.O.F. 15 de abril de 2020.

Acuerdo General número 7/2020, de 27 de abril de 2020, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se prorroga la suspensión de actividades jurisdiccionales y, por ende, se declaran inhábiles los días del periodo comprendido del 6 al 31 de mayo de 2020, y se habilitan los días que resulten necesarios para las actuaciones jurisdiccionales que se precisan. D.O.F. 29 de abril de 2020.

Acuerdo General número 10/2020, de 26 de mayo de 2020, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se declaran inhábiles los días del periodo comprendido del 1 al 30 de junio de 2020, y se habilitan los días que resulten necesarios para las actuaciones jurisdiccionales que se precisan. D.O.F. 31 de mayo de 2020.

Acuerdo General número 12/2020, de 29 de junio de 2020, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se prorroga la suspensión de plazos en los asuntos de la competencia de este Alto Tribunal durante el periodo comprendido del 1 al 15 de julio de 2020, y se habilitan los días que resulten necesarios para las actuaciones jurisdiccionales que se precisan. D.O.F. 30 de junio de 2020.

Acuerdo General número 13/2020, de 13 de julio de 2020, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se cancela el período de receso que conforme a lo previsto en el artículo 3° de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación tendría lugar del 16 de julio al 2 de agosto de 2020 y, para este período, se prorroga la suspensión de plazos en los asuntos de su competencia y se habilitan los días que resulten necesarios para las actuaciones jurisdiccionales que se precisan. D.O.F. 15 de julio de 2020.

9d3mj5db8W9owp/aEgnPluTJXKaENqx9gs2SloxZ3sg=ZRho4Wowi0RCmNcIlwADCUhaqmAGA9LORe61YcHotnQ=

de julio de dos mil veinte, se estableció la reanudación de los plazos procesales a partir del tres de agosto del año pasado, por lo que se continúa con la secuela procesal del presente asunto, se autoriza la emisión de proveídos con firma electrónica³ y se incorporan las notificaciones por lista o rotulón electrónicos visibles en el Portal de Internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los mismos efectos que las llevadas a cabo mediante publicación en los estrados de las listas o rotulones impresos.⁴

CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver en definitiva el presente asunto, de conformidad con los artículos 14, fracciones VII y XXIII, y 113, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintiuno⁵, en relación con los artículos 23, 25, segundo párrafo y 40, del Acuerdo Plenario 9/2005, de veintiocho de marzo de dos mil cinco, en tanto se trata de un servidor público que al momento de los hechos pertenecía a este Alto Tribunal y a quien se atribuye conducta infractora que no está expresamente una catalogada como grave.

³ Acuerdo General Plenario 14/2020.

[&]quot;QUINTO. Los proveidos que corresponda emitir al Ministro Presidente y a las y los Ministros instructores, así como los engroses y votos se firmarán, electrónicamente. La versión impresa de esas determinaciones, en la que consten las respectivas evidencias criptográficas, se agregará sin necesidad de certificación alguna."

⁴ Mediante Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la suprema Corte de Justicia de la Nación el 24 de junio de 2021, se prorrogó del 1 al 31 de julio de 2021, la vigencia de lo establecido en el Acuerdo General Plenario 14/2020 (D.O.F. 29 de junio de 2021).

⁵ La competencia del Ministro Presidente se encontraba igualmente prevista en la Ley Orgánica abrogada (artículo 133, fracción II).

P.R.A. 40/2017

9d3mj5db8W9owp/aEgnPIuTJXKaENqx9gs2SloxZ3sg=



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SEGUNDO. Marco normativo aplicable. Las normas SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN procesales que deben seguirse en el presente asunto son la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior al 8 de junio de 20216 y el Acuerdo General Plenario 9/2005, toda vez que al momento del inicio del procedimiento la Suprema Corte de Justicia de la Nación no había ejercido la facultad que le atribuye el artículo 9, fracción V, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.7

> En cuanto a las normas sustantivas, debe tenerse en cuenta que las comisiones de las que derivó el incumplimiento en la comprobación de viáticos tuvieron lugar antes de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por lo que resulta aplicable para determinar la falta administrativa la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Federal Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por ser las normas vigentes al momento de los incumplimientos en que se incurrió respecto de los viáticos otorgados para llevar a cabo comisiones oficiales.



Por ende, el estudio de la infracción que aquí se dilucida se rige por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en su texto vigente hasta el dieciocho de junio de dos mil

⁶ Conforme al texto anterior a la reforma publicada en el D.O.F. el 18 de junio de 2018.

Artículo 9. En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas para aplicar presente Ley:

Tratándose de las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos de los poderes judiciales, serán competentes para investigar e imponer las sanciones que correspondan, la **Suprema Corte de Justicia de la Nación** y el Consejo de la Judicatura Federal, conforme al régimen establecido en los artículos 94 y 109 de la Constitución <u>y en su</u> reglamentación interna correspondiente; y los poderes judiciales de los estados y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como sus consejos de la judicatura respectivos, de acuerdo a lo previsto en los artículos 116 y 122 de la Constitución, así como sus constituciones locales y reglamentaciones orgánicas correspondientes. Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior y de las Entidades de fiscalización de las entidades federativas, en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos, y (...)

.d630fcb9f52bca0abd957b75d5ae486f0cdfe00939af5f990cad93142e645d1

dieciocho, así como por lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Asimismo, no pasa inadvertido que, respecto la norma sustantiva aplicable, el incumplimiento en la comprobación de viáticos también es falta administrativa en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conforme al artículo 49, en la fracción VII, de dicho ordenamiento⁸, ya que la comprobación de viáticos es una acción de rendición de cuentas y, por tanto, el desacato en la comprobación de los mismos configura la citada falta administrativa.

TERCERO. Debido proceso y formalidades del procedimiento. De acuerdo con el artículo 40 del Acuerdo General Plenario 9/2005⁹, en las resoluciones del Presidente que pongan fin al procedimiento de responsabilidad administrativa, se deberá verificar la legalidad respecto de la sustanciación del procedimiento.

Para estar en aptitud de revisar cada uno de los derechos que protegen al servidor público involucrado, es necesario desarrollar el contenido del derecho al acceso a la tutela judicial, las etapas que lo integran, así como analizar cada uno de los derechos mínimos que deben garantizarse.

Las resoluciones que dicte el Pleno en los expedientes de responsabilidad administrativa no admitirán recurso alguno. En contra de las resoluciones que emita el Presidente procederá el recurso de inconformidad, en los términos señalados en el presente Acuerdo General.



⁸ **Artículo 49.** Incurrirá en falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:

VII. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, en términos de las normas aplicables;

Artículo 40. En las resoluciones que dicten el Pleno o el Presidente con las que se ponga fin a los procedimientos de responsabilidades administrativas deberá analizarse la existencia de la conducta infractora y, en su caso, la responsabilidad en su comisión, tomando en cuenta las circunstancias en que se dieron los hechos. De igual manera se verificará que la substanciación del procedimiento se haya realizado conforme a las reglas que prevé este Acuerdo General y, en su caso, se ordenará que se subsane la omisión o deficiencia detectada.

P.R.A. 40/2017

.d630fcb9f52bca0abd957b75d5ae486f0cdfe00939af5f990cad93142e645d1

9d3mj5db8W9owp/aEgnPluTJXKaENqx9gs2SloxZ3sg=



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

suprema corte de justicia de la Nación Como se desprende de la tesis jurisprudencial 1a./J. 42/2007, de rubro "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES"10, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido el acceso a una tutela iurisdiccional como el:

> [D]erecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión.



De este criterio se desprende que el acceso a la tutela jurisdiccional comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos que lo integran: (i) una etapa previa al juicio, a la que corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, el cual parte del derecho de acción como una especie del derecho de petición que se dirige a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por parte de éstas; (ii) una etapa judicial -desde el inicio del procedimiento y hasta la última actuación dentro del mismo-, a la que corresponden las garantías del debido proceso, y (iii) una etapa posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquel.

¹⁰ Tesis jurisprudencial 1a./J. 42/2007, registro de IUS 172759, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXV, abril de 2007, página 124.

9d3mj5db8W9owp/aEgnPluTJXKaENqx9gs2SloxZ3sg= 4Wowi0RCmNcllwADCUhaqmAGA9LORe61YcHotnQ=

Las garantías del debido proceso que resultan aplicables a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales permiten que cualquier persona involucrada en un litigio o controversia esté en aptitud de desplegar sus defensas antes de que las autoridades modifiquen en forma definitiva su esfera jurídica.

Al respecto, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto del contenido esencial del aludido derecho, tal y como se observa en la tesis jurisprudencial P. /J. 47/95, cuyo rubro es "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO".11

Según dicha jurisprudencia, las formalidades esenciales del procedimiento, cuyo cumplimiento permite concluir que se ha respetado la garantía de audiencia de los gobernados, son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar, y (iv) la emisión de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.

Con base en lo anterior y de la revisión del expediente se tiene lo siguiente:

¹¹ Tesis jurisprudencial P./J. 47/95, registro de IUS 200234, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo II, diciembre de 1995, página 133.

.d630fcb9f52bca0abd957b75d5ae486f0cdfe00939af5f990cad93142e645d1

9d3mj5db8W9owp/aEgnPluTJXKaENqx9gs2SloxZ3sg=



A. Inicio del Procedimiento. De conformidad con el artículo SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 134, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 32 y 37 del Acuerdo General Plenario 9/2005, vigentes al momento del inicio del procedimiento, cuando la Contraloría estime que cuenta con elementos que acrediten la comisión de una conducta infractora del marco jurídico que regula a los servidores públicos de la Suprema Corte puede iniciar de oficio el procedimiento de responsabilidades administrativas.

> De las documentales agregadas al oficio DGPC-10-2017-3223, emitido por el Director General de Presupuesto y Contabilidad, el Contralor consideró que existían elementos suficientes para tener por probablemente acreditada la causa de responsabilidad de incumplimiento de las leyes y normativa que determinan el manejo de recursos económicos públicos y ordenó el inicio del procedimiento.

> B. Notificación al presunto responsable. En términos del artículo 134, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación aplicable al procedimiento, en relación con los numerales 17 y 38 del Acuerdo General Plenario 9/2005, vigentes al momento de los hechos, el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete se notificó personalmente a

> en el lugar en el que fue comisionado para laborar y se le entregó una copia certificada del acuerdo de inicio al que se le agregó una copia del escrito de la denuncia y sus anexos. Asimismo, se le otorgó un plazo de cinco días hábiles para que formulara un informe sobre los hechos que se le atribuían (foja 161).



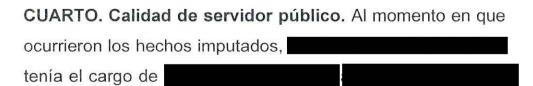


.d630fcb9f52bca0abd957b75d5ae486f0cdfe00939af5f990cad93142e645d1

Asimismo, en atención a que no señaló domicilio en la Ciudad de México, se ordenó que las notificaciones, aun las de carácter personal, se realizaran por medio de rotulón fijado en los estrados de la autoridad substanciadora y se tuvo por no designadas personas autorizadas de su parte (fojas 167 y 168 en relación con las fojas 157, 158 y 162).

D. Cierre del procedimiento. De conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General Plenario 9/2005, al estimar que el expediente quedó debidamente integrado, el Contralor ordenó la emisión del dictamen en el que propuso el sentido de la resolución que pone fin al procedimiento respectivo y lo sometió a consideración del Presidente para tal efecto.

Por lo anterior, se acredita que la sustanciación del procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del servidor público involucrado, se realizó conforme a las exigencias que impone el derecho al debido proceso, en tanto fueron garantizadas las formalidades esenciales del procedimiento y los derechos de los que es titular.



12

9d3mj5db8W9owp/aEgnPluTJXKaENqx9gs2SloxZ3sg=ZRho4Wowi0RCmNcllwADCUhaqmAGA9LORe61YcHotnQ=

9d3mj5db8W9owp/aEgnPIuTJXKaENqx9gs2SloxZ3sg=



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

suprema corte de Justicia de la Nación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde el dieciséis de octubre de dos mil dieciséis, de conformidad con lo señalado en el oficio DGRHIA/SGADP/DRL/535/2018. suscrito por la entonces Directora General de Recursos Humanos e Innovación Administrativa (foja 173).

> Asimismo, corroboran circunstancia los oficios esa comisión , visibles a fojas 3 a 5, 47 a 49, y 81 a 83, suscritos respectivamente por y por así como las solicitudes de viáticos firmadas por el comisionado fojas 13, 52 y 88).

En consecuencia, se comprueba que

era servidor público en activo de este Alto Tribunal, por lo que es procedente el inicio, tramitación y resolución de este asunto en términos del mencionado artículo 32 en relación con el artículo 26, ambos del Acuerdo Plenario 9/2005.

QUINTO. Determinación de la infracción administrativa.

La falta que se atribuye a prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente al momento de los hechos, por incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 8, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en relación con los artículos 130, 132 y Cuarto transitorio del Acuerdo

General de Administración I/2012, así como con el artículo Décimo Sexto del Acuerdo General de Administración XII/2003, que se citan a continuación:

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

"Artículo 131. Serán causas de responsabilidad para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación: (...)

XI. Las previstas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, siempre que no fueren contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional; (...)".

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

"Artículo 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: (...)

II. Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes y la normatividad que determinen el manejo de recursos económicos públicos; (...)".

Acuerdo General de Administración I/2012

"Artículo 130. Los viáticos deberán ser comprobados ante la Tesorería mediante documentos expedidos por terceros que reúnan los requisitos fiscales, y en los plazos correspondientes, conforme se establezca en los lineamientos. (...)".

"Artículo 132. El monto de viáticos no comprobados en términos del artículo 130 de este Acuerdo General, deberá ser reintegrado a la Suprema Corte mediante su depósito en los plazos establecidos para tal efecto y, en caso de incumplimiento, por descuento vía nómina al servidor público responsable de su comprobación, informando a la Contraloría de la Suprema Corte.

Transitorios (...)

CUARTO. Los lineamientos que se deriven del presente acuerdo, serán elaborados por las áreas competentes dentro de los 90 días siguientes a la fecha de entrada en vigor del presente acuerdo y sometidos a la aprobación del Comité de Gobierno por conducto de la Oficialía Mayor.



.d630fcb9f52bca0abd957b75d5ae486f0cdfe00939af5f990cad93142e645d1

9d3mj5db8W9owp/aEgnPluTJXKaENqx9gs2SloxZ3sg=



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN En tanto estos lineamientos son emitidos, seguirán rigiéndose, en lo que no se oponga al presente Acuerdo, la normatividad vigente.
(...)".

Acuerdo General de Administración XII/2003

"DÉCIMO SEXTO. Al término de su comisión, las personas comisionadas (...) deberán rendir un 'Informe de Viáticos' en el formato que indique la Oficina de Viáticos (...).

La comprobación de gastos deberá realizarse a más tardar a los quince días hábiles siguientes a la realización de la comisión encomendada".

Los artículos transcritos establecen que una de las obligaciones a cargo de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, consiste en el cumplimiento de las normas relativas a la comprobación de los viáticos que les son otorgados para realizar determinadas tareas que les son encomendadas, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la conclusión de la comisión.

Por ello, si a los servidores públicos se les entregan determinadas cantidades de dinero para cubrir los gastos relacionados con alguna comisión, tienen la obligación de comprobar las erogaciones que hicieron y, en su caso, de reintegrar los montos de los viáticos que no fueron comprobados.



Asimismo, es importante señalar que en cuanto a la normativa aplicable al caso, los artículos 130 y 132 del Acuerdo General de Administración I/2012, establecen que la comprobación de viáticos y su reintegro se debe realizar dentro de los plazos que se establezcan en los lineamientos que en su momento se emitan sobre el particular.



Sin embargo, en la fecha de los hechos imputados dichos lineamientos no habían sido emitidos, como se verá más adelante, por lo que tomando en consideración las fechas en que se verificaron las conductas que se le reprochan al servidor público involucrado debe aplicarse la normatividad que se encontraba vigente hasta antes de que se expidiera el referido acuerdo, conforme a lo dispuesto en el artículo Acuerdo Cuarto transitorio del citado General Administración I/2012, esto es, resulta aplicable el Acuerdo General de Administración XII/2003, cuyo artículo Décimo Sexto señala que la comprobación de los viáticos debe efectuarse a más tardar a los quince días hábiles siguientes a la realización de la comisión encomendada al servidor público.

Además, la obligación de comprobar no solo implica presentar la relación de gastos devengados y las facturas correspondientes a los gastos, sino también la devolución de los recursos que no se ejercieron.

Ahora bien, fue hasta el quince de junio de dos mil dieciocho, que entró en vigor el Acuerdo General de Administración 1/2018, por el que se emiten los "Lineamientos relativos a la Transportación, Hospedaje y Viáticos para Comisionados y Gastos de Viaje para Disertantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", por lo que dichos lineamientos son posteriores a la comisión de la conducta materia de este procedimiento; por tanto, al no haber existido ni estar vigentes en aquella época, no resultan aplicables al presente asunto.



SEXTO. Acervo probatorio que acredita la infracción. En SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN el expediente identificado con el registro P.R.A. 40/2017, obran las constancias que se relacionan a continuación:

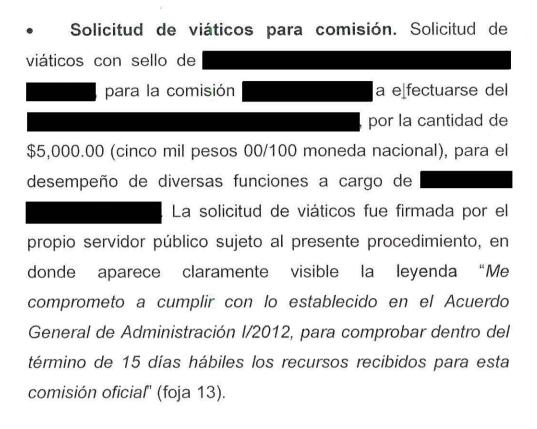
1. Denuncia. Oficio DGPC-10-2017-3223 de diecisiete de
octubre de dos mil diecisiete, emitido por el Director General
de Presupuesto y Contabilidad, dirigido a la Directora General
de Responsabilidades Administrativas y de Registro
Patrimonial, mediante el cual denuncia irregularidades por
parte de y, al respecto, remite
diversa documentación relacionada con el monto de los
viáticos no comprobados que no fueron reintegrados, en
relación con las comisiones
las cuales fueron realizadas
y , todos de
(fojas 1 a 143).
N STORE IN

Del citado oficio y documentación remitida, se desprende lo siguiente:

a) Respecto de la comisión realizada

Copia certificada , emitido por dirigido a la Directora General de la Tesorería, mediante el cual le informa fue comisionado que, entre otros,

(fojas 3 a 9).



- Transferencia bancaria. Copia certificada de la lista de traspasos de pago interbancario correspondiente al , en la que se observa que a le fue depositada la cantidad de \$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) (foja 10).
- Relación de gastos devengados. Relación de gastos devengados en la comisión , con sello de recepción de comprobó oportunamente ante la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad la cantidad de \$4,084.00 (cuatro mil ochenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional); sin embargo, se aprecia un remanente a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de \$916.00 (novecientos dieciséis pesos 00/100 moneda nacional) (fojas 14 a 40).



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Solicitud de descuento. Copia del oficio DGPC-03-

emitido por el Director General de Presupuesto y Contabilidad dirigido a la entonces Directora General de Recursos Humanos e Innovación Administrativa, mediante el cual solicita que a los servidores públicos que relaciona en documento anexo, entre los cuales se encuentra les sea descontado vía nómina el importe de las comisiones que no fueron comprobadas en el plazo señalado en el artículo 132 y Cuarto Transitorio del Acuerdo

General de Administración I/2012 (foja 11).

• Relación de comisiones vencidas. Relación de los viáticos vencidos enviados a descuento por nómina, de la que se advierte que a se le encomendaron, entre otras, la comisión identificada con el registro , respecto de la cual al , omitió reintegrar la cantidad de \$916.00 (novecientos dieciséis pesos 00/100 moneda nacional) (foja 12).

• Relación de descuento vía nómina. Relación de comisiones enviadas a descuento por nómina durante el , en la que se observa que a se le descontó vía nómina la cantidad total de \$1,981.92 (un mil novecientos ochenta y un pesos 92/100 moneda nacional), de los cuales \$916.00 (novecientos dieciséis pesos 00/100 moneda nacional) corresponden a la comisión y la cantidad restante corresponde a las diversas comisiones (foja 2).



• Retención vía nómina. Reporte de incidencias de nómina que contiene la relación de quincenas de retención vía nómina, emitido el por la Directora de Nómina respecto del oficio DGPC-03-1106, efectuadas a , por la cantidad total de \$1,981.92 (un mil novecientos ochenta y un pesos 92/100 moneda nacional), de los cuales \$916.00 (novecientos dieciséis pesos 00/100 moneda nacional) corresponden a la comisión reseñada en este apartado (fojas 41 a 45).



• Solicitud de viáticos para comisión. Solicitud de viáticos con sello de fecha , para la comisión a efectuarse del de ese mismo año, por la cantidad de \$1,800.00 (un mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional), para el desempeño de diversas funciones a cargo de . La solicitud de viáticos fue firmada por el propio servidor público sujeto al presente

P.R.A. 40/2017

.d630fcb9f52bca0abd957b75d5ae486f0cdfe00939af5f990cad93142e645d1

9d3mj5db8W9owp/aEgnPluTJXKaENqx9gs2SloxZ3sg=



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Procedimiento,

en donde aparece leyenda "Me suprema corte de Justicia de la Nación comprometo a cumplir con lo establecido en el Acuerdo General de Administración I/2012, para comprobar dentro del término de 15 días hábiles los recursos recibidos para esta comisión oficial" (foja 52).

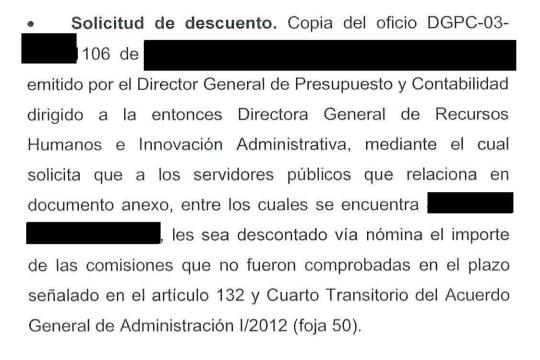
> Recibo de cantidades otorgadas. Copia certificada del recibo de efectivo correspondiente al , en la que se observa que a le fue entregada la cantidad de \$1,800.00 (un mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional). Asimismo, en dicho documento aparece el siguiente texto: "Me comprometo a cumplir con lo establecido en el Acuerdo General de Administración I/2012, para comprobar dentro del término de los 15 días hábiles los recursos recibidos para esta comisión oficial y, de no ser así, autorizo a que me sea descontado vía nómina el importe no comprobado, además de ser objeto de la aplicación del artículo 8avo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos" (foja 53).



devengados en la comisión con sello de recepción de en la comprobó oportunamente que ante la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad, la cantidad de \$1,413.00 (un mil cuatrocientos trece pesos 00/100 moneda nacional); sin embargo, se aprecia un saldo neto a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de \$387.00 (trescientos ochenta y siete pesos 12/100 moneda

Relación de gastos devengados. Relación de gastos

nacional) (fojas 54 a 74).



- Relación de comisiones vencidas. Relación de los viáticos vencidos enviados a descuento por nómina, de la que se advierte que a se le encomendaron, entre otras, la comisión identificada con el registro respecto de la cual al , omitió devolver el remanente de \$387.00 (trescientos ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional) (foja 51).
- Relación de descuento vía nómina. Relación de comisiones enviadas a descuento por nómina durante el ejercicio fiscal , en la que se observa que, a se le descontó vía nómina la cantidad total de \$1,981.92 (un mil novecientos ochenta y un pesos 92/100 moneda nacional), de los cuales, \$387.00 (trescientos ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional) corresponden a la comisión . La cantidad restante corresponde a las diversas comisiones .



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ®

Retención vía nómina. Reporte de incidencias de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN nómina que contiene la relación de quincenas de retención vía nómina, emitido el

por la Directora de Nómina respecto del oficio DGPC-03--1106, efectuadas , por la cantidad total de \$1,981.92 (un mil novecientos ochenta y un pesos 92/100 moneda nacional), de los cuales \$387.00 (trescientos ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional) corresponden a la comisión

a) Pagnasta da la samiai	
c) Respecto de la comisi	ór

reseñada en este apartado (fojas 75 a 79).

realizada del

Copia certificada del oficio



emitido por

Oficio de comisión.

dirigido a la Directora General de la Tesorería, mediante el cual informa que fue comisionado en del

(fojas 81 a 83).

Solicitud de viáticos para comisión. Solicitud de viáticos con sello de fecha para la comisión a efectuarse del de ese mismo año, por la cantidad de \$9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 moneda nacional), para el desempeño de diversas funciones a cargo de . La solicitud de viáticos fue firmada por el propio servidor público sujeto al presente

procedimiento, en donde aparece la leyenda "Me comprometo a cumplir con lo establecido en el Acuerdo General de Administración I/2012, para comprobar dentro del término de 15 días hábiles los recursos recibidos para esta comisión oficial" (foja 88).

- Transferencia bancaria. Copia certificada de la lista de traspasos de pago interbancario correspondiente al en la que se observa que a le fue depositada la cantidad de \$9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 moneda nacional) (fojas 84 y 85).
- Relación de gastos devengados. Relación de gastos devengados en la comisión con sello de recepción de comprobó oportunamente ante la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad, la cantidad de \$8,321.08 (ocho mil trescientos veintiún pesos 08/100 moneda nacional); sin embargo, se aprecia un saldo neto a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de \$678.92 (seiscientos setenta y ocho pesos 92/100 moneda nacional) (fojas 89 a 137).
- Solicitud de descuento. Copia del oficio DGPC-03-1106 de
 emitido por el Director General de Presupuesto y Contabilidad dirigido a la entonces Directora General de Recursos Humanos e Innovación Administrativa, mediante el cual solicita que a los servidores públicos que relaciona en documento anexo, entre los cuales se encuentra



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

les sea descontado vía nómina el importe SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN de las comisiones que no fueron comprobadas en el plazo señalado en el artículo 132 y Cuarto Transitorio del Acuerdo General de Administración I/2012 (foja 86).

> Relación de comisiones vencidas. Relación de los viáticos vencidos enviados a descuento por nómina, de la que se advierte que a encomendaron, entre otras, la comisión identificada con el respecto de la cual , omitió devolver el remanente de \$678.92 (seiscientos setenta y ocho pesos 92/100 moneda nacional) (foja 87).



Relación de descuento vía nómina. Relación de comisiones enviadas a descuento por nómina durante el ejercicio fiscal en la que se observa que a se le descontó vía nómina la cantidad total de \$1,981.92 (un mil novecientos ochenta y un pesos 92/100 moneda nacional), de los cuales \$678.92 (seiscientos setenta y ocho pesos 92/100 moneda nacional) corresponden a la comisión La cantidad restante corresponde a las diversas comisiones (foja 80).

Retención vía nómina. Reporte de incidencias nómina que contiene la relación de quincenas de retención vía nómina, emitido el por la Directora de Nómina respecto del oficio DGPC-03--1106, efectuadas por la cantidad total de \$1,981.92 (un mil novecientos ochenta y un pesos 92/100 moneda nacional), de los cuales \$678.92 (seiscientos setenta y ocho pesos 92/100 moneda nacional) corresponden a la comisión reseñada en este apartado (fojas 138 a 143).

- 2. Nombramiento y calidad de servidor público. Obra en autos la constancia de antigüedad en el Poder Judicial de la Federación de (Oficio DGRHIA/SGADP/DRL/535/2018, de veinte de agosto de dos mil dieciocho), de donde se desprende que dicho servidor público ingresó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el dieciséis de enero de dos mil tres, desempeñó diversos cargos y que, a la fecha de las conductas imputadas, era en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (foja 173).
- 3. antiquedad. Constancia de puesto Oficio V DGRHIA/SGADP/DRL/535/2018, de veinte de agosto de dos mil dieciocho, signado por la entonces Directora General de Recursos Humanos e Innovación Administrativa, en el que informa a su homóloga de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial que, al fecha en que se actualizó la infracción respecto a la última comisión. contaba con una antigüedad de 12 años, 2 meses y 16 días.

Asimismo, informó que dicho servidor público no continúa laborando en este Alto Tribunal en virtud de que causó baja

, pues



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (foja 173)¹².

4. Constancia sobre sanción previa. Constancia de nueve de enero de dos mil veinte, suscrita por la Subdirectora General de Responsabilidades Administrativas en la que consta que, a esa fecha, se tiene registro de que

ha sido sancionado en 3 procedimientos de responsabilidad administrativa por infracciones que se relacionan con la comprobación de viáticos, mismos que se relacionan en la siguiente tabla:

Expediente	Fecha de la Resolución	Sanción impuesta
P.R.A. 31/2016	31/octubre/2017	
P.R.A. 79/2016	09/mayo/2019	
P.R.A. 80/2016	09/mayo/2019	

Por cuanto hace a las pruebas relacionadas anteriormente, a excepción de las solicitudes de viáticos para comisión, la copias de los listados de transferencias bancarias y el recibo de cantidades en efectivo, se les reconoce valor probatorio pleno en términos de lo previsto en los artículos 93, fracción II, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme a lo dispuesto en





A foja 179, 188 y 189 se aprecian los oficios SEFSP/DGRH/URL/2027/2019, de 11 de enero de 2019, y SEA/DGRH/URL/37365/2019, de 23 de agosto de 2019, emitidos por el Director General de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal en el que, a petición de la Contraloría, expresa la antigüedad del servidor público sujeto al presente procedimiento al 11 de enero y 21 de agosto, ambos de 2019.

los diversos 4 del Acuerdo General Plenario 9/2005¹³ y 47 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ¹⁴ por tratarse de documentos expedidos por servidores públicos en ejercicio de las facultades que las normas aplicables les confieren.

Por cuanto hace a las documentales privadas exhibidas en copias certificadas consistentes en las solicitudes de viáticos para comisión, la copias de los listados de transferencias bancarias el recibo de cantidades en efectivo. adminiculadas con los demás documentos públicos que se especificaron líneas arriba, se llega a la conclusión de la existencia de cada una de las comisiones y del traspaso de los recursos públicos solicitados para cada una de ellas, por lo se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo previsto en los artículos 93, fracción III, 129, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de responsabilidades administrativas.

SÉPTIMO. Adecuación de la conducta con la infracción administrativa. A se le atribuye la omisión de devolver el remanente de los viáticos que le fueron entregados para desempeñar las comisiones identificadas con los registros dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha en que fueron realizadas.

¹³ Artículo 4. Para la substanciación y resolución de los procedimientos previstos en este Acuerdo serán aplicables la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, en lo que no se oponga a lo dispuesto en esta última, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En su caso, será aplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, deberá acudirse a los principios generales de derecho, en términos de lo previsto en el artículo 14, párrafo cuarto, de la Constitución General de la República, salvo por lo que se refiere a las causas de responsabilidad y sanciones aplicables.
¹⁴ Artículo 47. En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en los Títulos Segundo y Tercero de la Ley, así como en la apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN A partir de las documentales precisadas en el considerando suprema corte de justicia de la nación que antecede, se tiene por acreditado lo siguiente:

En relación con la comisión se observa que, conforme a la relación de gastos devengados visibles a fojas 14 y 37, signadas por en su carácter de comisionado a debía reintegrar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro del plazo de 15 días hábiles posteriores a la comisión, la cantidad de \$916.00 (novecientos dieciséis pesos 00/100 nacional); plazo que transcurrió del moneda / por lo que al no hacer la devolución, el Director General de Presupuesto y Contabilidad solicitó mediante el oficio DGPC-03a su homóloga de Recursos Humanos e Innovación Administrativa, el descuento del remanente de los recursos otorgados para viáticos vía nómina (foja 11).

En consecuencia, respecto a la comisión en comento, se tiene por acreditada la infracción atribuida a dicho servidor público, por incumplir lo dispuesto en el artículo 8, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en relación con los artículos 130, 132 y Cuarto Transitorio del Acuerdo General de Administración I/2012, así como con el artículo Décimo Sexto del Acuerdo General de Administración XII/2003.

En relación con la comisión identificada con el registro
 , se observa que conforme a la relación de

¹⁵ De dicho plazo se descontaron los días por haber sido sábados y domingos, así como el día de ese año, de conformidad con el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el artículo Primero, incisos a), b), c) y e) del Acuerdo General Plenario 18/2013.

gastos devengados visible a foja 54, signada por , en su carácter de comisionado a , debía reintegrar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la cantidad de \$387.00 (trescientos ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional).

De tal suerte, el imputado estaba obligado a devolver el remanente correspondiente a los viáticos otorgados no devengados en la citada comisión, dentro de los 15 días hábiles siguientes a su conclusión; plazo que transcurrió del 6, sin embargo, el servidor público involucrado omitió reintegrar los recursos públicos que sobraron de dicha comisión dentro del plazo antes indicado, por lo que el Director General de Presupuesto y Contabilidad solicitó, mediante el oficio DGPC-03-1106, a su homóloga de Recursos Humanos e Innovación Administrativa, le fuera descontado el remanente de los recursos otorgados para viáticos vía nómina (foja 50).

Atento a lo anterior, se demuestra que dicho servidor público incumplió con lo dispuesto en el artículo 8, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en relación con los artículos 130, 132 y Cuarto Transitorio del Acuerdo General de Administración I/2012, así como con el artículo Décimo Sexto del Acuerdo General de Administración XII/2003.

En relación con la comisión identificada con el registro
 se observa a foja 89 que presentó la relación

De dicho plazo se descontaron los días por tratarse de sábados y domingos, de conformidad con el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el artículo Primero, incisos a) y b) del Acuerdo General Plenario 18/2013.

1f2dbcbc20cb4ad240c3339a4c717fb22de3bc5586c3f400d220174c2e6f5c05

9d3mj5db8W9owp/aEgnPluTJXKaENqx9gs2SloxZ3sg=

ZRho4Wowi0RCmNcIIwADCUhaqmAGA9LORe61YcHotnQ



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

por tanto, debía reintegrar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la cantidad total de \$678.92 (seiscientos setenta y ocho pesos 92/100 moneda nacional).

En consecuencia, estaba obligado a presentar la relación de gastos y, además, a realizar el depósito del remanente correspondiente a los viáticos no devengados, dentro de los 15 días hábiles siguientes a que concluyó dicha comisión; plazo que transcurrió del

17; sin embargo, el servidor público involucrado omitió reintegrar los recursos públicos de dicha comisión dentro del plazo antes indicado, por lo que el Director General de Presupuesto y Contabilidad solicitó, mediante el oficio DGPC-03-1106, a su homóloga de Recursos Humanos e Innovación Administrativa, le fuera descontado el remanente de los recursos otorgados para viáticos vía nómina (foja 86).

Respecto a la comisión en comento, se tiene por acreditada la infracción atribuida a dicho servidor público, por incumplir lo dispuesto en el artículo 8, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en relación con los artículos 130, 132 y Cuarto Transitorio del Acuerdo General de Administración I/2012, así como con el artículo Décimo Sexto del Acuerdo General de Administración XII/2003.

¹⁷ De dicho plazo se descontaron los días , así como por haber sido sábados y domingos, de conformidad con el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el artículo Primero, incisos a) y b) del Acuerdo General Plenario 18/2013.

De lo hasta aquí expuesto se advierte que, en relación con las comisiones

el servidor público denunciado omitió reintegrar las cantidades relativas a los viáticos otorgados dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la conclusión de cada una de las citadas comisiones, por lo que éstas debieron ser descontadas vía nómina.

En concreto, respecto de las tres comisiones antes mencionadas realizadas por en

en la ciudad de le fue entregado un total de \$15,800.00 (quince mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional), de los cuales comprobó oportunamente \$13,818.08 (trece mil ochocientos dieciocho pesos 08/100 moneda nacional), por lo que el remanente que no devolvió en el plazo establecido a este Alto Tribunal, ascendió a la cantidad de \$1,981.92 (un mil novecientos ochenta y un pesos 92/100 moneda nacional).

Ante tales circunstancias, se tienen por demostradas las conductas infractoras que se imputan a respecto de la omisión de reintegrar el monto que en cada caso correspondía, de los viáticos que le fueron otorgados para llevar a cabo las comisiones

En consecuencia, se acredita la causa de responsabilidad administrativa atribuida al servidor público, prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplimiento al artículo 8, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades

1f2dbcbc20cb4ad240c3339a4c717fb22de3bc5586c3f400d220174c2e6f5c05

9d3mj5db8W9owp/aEgnPluTJXKaENqx9gs2SloxZ3sg=



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Administrativas de los Servidores Públicos, en relación con SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN los numerales 130, 132 y Cuarto Transitorio del Acuerdo General de Administración I/2012 y con el artículo Décimo Sexto del Acuerdo General de Administración XII/2003.

> OCTAVO. Individualización de la sanción. Al haber quedado demostrada la infracción administrativa atribuida al servidor público involucrado, se procede a individualizar la sanción que le corresponde, conforme a los artículos 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente hasta el siete de junio de dos mil veintiuno, y 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en relación con los numerales 45 y 46 del Acuerdo Plenario 9/2005, en los términos siguientes:

a) Gravedad de la infracción. La conducta atribuida al infractor no está expresamente catalogada como grave, toda vez que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 131, fracciones I a VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente al momento de los hechos, ni 13, antepenúltimo párrafo, de la Ley Federal de Administrativas Responsabilidades los Servidores de Públicos.

- b) Circunstancias socioeconómicas. No es necesario analizarlas, puesto que en este caso no se impondrá sanción pecuniaria.
- c) Nivel jerárquico y antigüedad en el servicio. Del oficio DGRHIA/SGADP/DRL/535/2018 de veinte de agosto de dos mil dieciocho, signado por la entonces Directora General del Innovación Administrativa, Recursos Humanos е



desprende que al fecha en que se actualizó la última infracción en que incurrió el servidor público en relación con la última comisión que le fue asignada, contaba con una antigüedad de 12 años, 2 meses y 16 días, y tenía el puesto de adscrito al de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el dieciséis de octubre de dos mil dieciséis (foja 173).

Cabe señalar que dicho servidor público causó baja posteriormente de este Alto Tribunal,

a partir del

- d) Condiciones exteriores y los medios de ejecución. El incumplimiento de la obligación señalada afectó de manera negativa la rendición de cuentas respecto del uso de los recursos públicos, puesto que no reintegró el remanente de los viáticos no comprobados a este Alto Tribunal, mismo que para su recuperación tuvo que ser descontado vía nómina.
- e) Reincidencia. De la constancia de nueve de enero de dos emitida por la Subdirectora Responsabilidades Administrativas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que existen registros que acreditan que ha sido sancionado con en tres procedimientos de responsabilidad administrativa; embargo, no se tomarán en cuenta para efectos de la reincidencia.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Lo anterior es así, porque las resoluciones fueron emitidas y SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN notificadas con posterioridad a las tres comisiones origen de la conducta materia del presente procedimiento.

> En efecto, la primera sentencia de los tres procedimientos previos que han sido resueltos en contra de es del treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, es decir, es posterior a las tres comisiones origen de la conducta materia del presente procedimiento, las cuales se desarrollaron en por tanto, el público imputado no servidor / había sido declarado responsable de dichos procedimientos a la fecha en que se notificó el inicio del asunto que aquí se dilucida (cuatro de diciembre de dos mil diecisiete).

> Así, jurídicamente no se consideran para efectos de la reincidencia que se analiza en este apartado, ya que para hacerlo era menester que la nueva falta se cometiera con declaración de responsabilidad posterioridad a administrativa, cuestión que, como se evidenció, en el presente caso no acontece, de conformidad con el artículo 14, último párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos¹⁸ (foja 194).



En efecto, si las infracciones que aquí se le atribuyen a

acontecieron en

, es indudable que a esa fecha no había sido declarado responsable del incumplimiento de alguna de

¹⁸ ARTÍCULO 14.- Para la imposición de las sanciones administrativas se tomarán en cuenta

Para los efectos de la Ley, se considerará reincidente al servidor público que habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el artículo 8 de la Ley, incurra nuevamente en una o varias conductas infractoras a dicho precepto legal.

las obligaciones a que se refiere el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ya que la resolución más antigua que ha sido dictada en su contra fue emitida hasta el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, es decir, con posterioridad a las faltas aquí analizadas.

El criterio antes expuesto ha sido reiterado en múltiples procedimientos de responsabilidad administrativa. Por citar algunos ejemplos, los asuntos 13/2017 y 17/2017 (resueltos el siete de noviembre de dos mil diecinueve), así como 85/2016 y 86/2016 (resueltos el veintidós de enero de dos mil veinte).

f) Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones. En la especie no existe prueba de que el infractor hubiera obtenido algún beneficio o lucro indebido, ni ocasionado daño o perjuicio económico a este Alto Tribunal con motivo de la infracción en que incurrió.

Ello, porque se toma en consideración que el servidor público comprobó oportunamente los gastos de las comisiones citadas, no obstante, en ningún caso reintegró el remanente de los viáticos otorgados dentro del plazo señalado por la norma mediante el depósito respectivo, pero dichas cantidades sí fueron recuperadas por este Alto Tribunal, al habérsele descontado vía nómina.

En mérito de las consideraciones que anteceden y la necesidad de suprimir estas prácticas indebidas en este Alto Tribunal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14,

P.R.A. 40/2017

1f2dbcbc20cb4ad240c3339a4c717fb22de3bc5586c3f400d220174c2e6f5c05

9d3mj5db8W9owp/aEgnPluTJXKaENqx9gs2SloxZ3sg=



fracciones VI y XXIII, 133, fracción II de la Ley Orgánica del suprema corte de Justicia de la Nación Poder Judicial de la Federación actualmente vigente, 135, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente al inicio del procedimiento¹⁹: 14 de la Lev Federal de Responsabilidades Administrativas Servidores Públicos; 45, fracción I, y 46 del Acuerdo Plenario 9/2005, se debe imponer al infractor la sanción consistente en , que se ejecutará en términos de lo establecido en el artículo 48, fracción I, del citado Acuerdo General Plenario 9/2005.

> Asimismo, una vez que cause ejecutoria, y considerando que a la fecha de la presente resolución se trata de un servidor público del Consejo de la Judicatura Federal, en atención al artículo 178 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en de responsabilidades administrativas, materia patrimonial, control y rendición de cuentas²⁰, deberá remitirse copia certificada de la presente resolución²¹ a la Dirección General de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de que sea agregada al expediente personal del servidor público.



¹⁹ Artículo transitorio QUINTO del Decreto publicado en el D.O.F. el 7 de junio de 2021:

^{&#}x27;Quinto. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio.

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas del 28 de noviembre de 2018, publicado en el D.O.F. el 7 de diciembre de 2018, reformado por diverso acuerdo publicado en el D.O.F. el 10 de octubre de 2019:

[&]quot;Artículo 178. Deberá remitirse a la Dirección General de Recursos Humanos, el archivo electrónico de toda resolución que cause estado e imponga sanción, para que se agregue al expediente personal del servidor público o ex servidor público sancionado; y a la Contraloría para que actualice el Sistema de Registro de Servidores Públicos y de Particulares

²¹ La sección correspondiente a la "Ejecución y Efectos de las Sanciones" del Acuerdo General referido del CJF (artículos 177 y 178), establece el envío electrónico entre las áreas internas del CJF (la DGRH y la Contraloría de dicho ente público), pero no se prevé para las resoluciones que emite la SCJN, por lo que a fin de tener certeza en cuanto a la recepción de la sentencia, se ordena la emisión de la misma en copia certificada.

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

primero.

es responsable de la falta administrativa prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 8, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en relación con los artículos 130, 132 y Cuarto Transitorio del Acuerdo General de Administración I/2012, así como con el artículo Décimo Sexto del Acuerdo General de Administración XII/2003.

SEGUNDO. Se impone al servidor público

la sanción consistente en

misma que deberá ser ejecutada conforme al artículo 48,
fracción I, del Acuerdo General Plenario 9/2005.

TERCERO. Remítase copia certificada a la Dirección General de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal para los efectos del último considerando de la misma.

y por oficio a la Dirección General de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal, ambos a través de la Contraloría de este Alto Tribunal, así como por lista o rotulón electrónico visibles en el Portal de Internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos del artículo 20 del Acuerdo General de Administración V/2020 del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de nueve de octubre de dos mil veinte, por el que se establecen reglas para el trámite



electrónico de los procedimientos de responsabilidad PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN administrativa.

> Devuélvase el expediente a la Contraloría de este Alto Tribunal para los efectos legales a que haya lugar y, en su oportunidad, archívese como asunto totalmente concluido. CÚMPLASE.

> Así lo resolvió el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos de lo dispuesto en los artículos 3 y 7 del Acuerdo General de Administración V/2020 del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de nueve de octubre de dos mil veinte, por el que se establecen reglas para el trámite electrónico de los procedimientos de responsabilidad administrativa, quien actúa con el Maestro Luis Fernando Corona Horta, Director General de Asuntos Jurídicos de este Alto Tribunal quien certifica.

MINISTRO PRESIDENTE ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Actividad Nombre del servidor público Valido Karla Patricia Montoya Gutiérrez Subdirectora General Revisó Juan Carlos Luna López Elaboró Luis David Vargas Díaz Barriga Director de Área

Esta hoja corresponde al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa número 40/2017.